

Una introducción a los estudios actuales sobre la política, el conflicto y el estado en América Latina y el Caribe

Bettina Levy*

El presente libro reúne una selección de artículos escritos por jóvenes científicos sociales de los centros miembros del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Estos trabajos sintetizan los resultados de las investigaciones que ellos condujeron como becarios del Programa Regional de Becas de CLACSO entre septiembre de 1999 y junio de 2000.

Los capítulos que conforman esta compilación abordan, desde diferentes perspectivas teóricas y metodológicas, un conjunto de problemas y muy principalmente las formas actuales que asumen la política y el conflicto social en América Latina y el Caribe. Estas preocupaciones se hallaban en el centro de la convocatoria realizada por CLACSO en ocasión del lanzamiento de dos concursos para investigadores sociales jóvenes, en el marco de los cuales resultaron ganadores los autores de estos trabajos. Los títulos de estos concursos fueron dos, íntimamente relacionados: por un lado, *Estado, política y conflictos sociales*; por el otro *Democracia, derechos sociales y equidad*. Los temas específicos de cada una de las monografías, las reflexiones y las conclusiones aportados por los autores dan cuenta de la diversidad de puntos de vista y líneas de investigación que nutren los estudios sociales impulsados por las instituciones de formación e investigación de la región.

Vivimos en un mundo en el que la democracia se ha convertido en la forma privilegiada de organización política. Paradojalmente, esta época es aquella en la que también se proclama el fin de la política y las utopías emancipatorias y con ello, la caducidad de la potencialidad creadora de la acción humana. Los resultados están a la vista. Por un lado, los gobiernos democráticos de

* Socióloga, Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina. Actualmente prepara su tesis en la Maestría en Sociología Económica de la Universidad Nacional de General San Martín (IDAES/USAM). Se desempeña como coordinadora del Programa Regional de Becas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y docente en la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Investigadora UBACYT, Instituto Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (IGG/FCS/UBA).

la región subordinan sus políticas a los rígidos preceptos del consenso neoliberal. Por el otro, nuestras poblaciones padecen los efectos regresivos de tales políticas en un contexto de extrema incertidumbre y falta de garantías en materia del cumplimiento de los derechos de la moderna ciudadanía. Como consecuencia de ello, nos encontramos frente a una ciudadanía escéptica, una creciente deslegitimización gubernamental y una no menos profunda crisis de representación que impacta directamente sobre los partidos políticos tradicionales y otras formas de organización de los sectores populares, muy especialmente los sindicatos. El creciente peso de los medios de comunicación de masas sobre la vida cívica y política de las sociedades, la avanzada de los grandes intereses económicos privados sobre la esfera pública, y la excluyente participación de los tecnócratas y expertos económicos en las decisiones de estados al menos formalmente democráticos, contribuyen a visualizar un panorama caracterizado por la reducción de los espacios abiertos para el debate de los asuntos públicos.

Este estrechamiento del espacio discursivo de la política en nuestra región florece en tiempos en los cuales se profundizan las distancias y contradicciones entre ricos y pobres. Es en ese momento cuando el discurso neoliberal se erige como la única alternativa, impugnando la capacidad de los actores y fuerzas sociales para intervenir sobre su propio destino. Se trata de un discurso hegemónico que se presenta articulado orgánicamente en torno a un conjunto de ideas generadas, sostenidas y difundidas por organismos internacionales, institutos de investigación y gestión social, "tanques de pensamiento", centros de planificación, partidos políticos de derecha y medios de comunicación de masas. Según este ideario lo único "realista" es admitir la inexistencia de alternativas, lo cual borra de un plumazo la multiplicidad de lo real y las diversas posibilidades que se constituyen en las coyunturas críticas de la historia. Siguiendo a Jacques Rancière podríamos decir que si la utopía es el pensamiento de lo posible, el "realismo" neoliberal es "una de las maneras utópicas de configurar el telos y reencontrar la rosa de la razón en la cruz del presente" (Rancière, 1994: 24).

El discurso neoliberal que ha prevalecido en nuestras sociedades latinoamericanas presenta varias caras, entre las cuales no todas son consistentes con los valores igualitarios y las prácticas participativas de la democracia. Por un lado es tecnocrático, en la medida que transforma el debate sobre los objetivos políticos y sobre lo que en filosofía política se denomina "la buena sociedad" en una simple discusión técnica sobre los instrumentos macroeconómicos y las formas más apropiadas para garantizar la eficiencia de la gestión estatal (Vilas, 2001). Este tecnocratismo impide una genuina discusión de los fines de la política, impone ciertas metas como las respuestas necesarias y socialmente neutras a un conjunto de dilemas técnicos e invisibiliza las disyuntivas y las efectivas orientaciones políticas involucradas por dicha imposición. Así, por ejemplo, la primacía del equilibrio fiscal, la estabilidad de la moneda o el pago de la deuda externa son presentados como meros recursos técnicos cuando en realidad constituyen opciones políticas. Por otro lado, el discurso neoliberal es también economicista, en tanto subordina la orientación de las

decisiones públicas a una lógica de la competitividad que está ligada a la apertura de la cuenta de capitales y que ordena las economías nacionales según la división internacional del trabajo que definen los grandes actores transnacionales (Boron y Gambina, 2002: 15). Ambos rasgos, el tecnocratismo y el economicismo, son dudosamente compatibles con la vida democrática, entendiéndola ésta en su más auténtica acepción y no como un simple sistema de reglas vacío de todo contenido.

El discurso neoliberal sobre la política y la democracia

Desde mediados de los años setenta, y de manera evidente en la década del ochenta, los países de América Latina y el Caribe experimentaron el agotamiento del proceso de desarrollo económico e industrial impulsado por el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones. Fue durante esa década, y en el marco de la crisis de la deuda, que los actores políticos y sociales de las nuevas democracias adoptaron, con mayor o menor convicción, las políticas de ajuste promovidas por el Consenso de Washington. De acuerdo con el diagnóstico ortodoxo, la responsabilidad de la crisis se atribuyó a las distorsiones producidas por los legados populistas e intervencionistas de los estados latinoamericanos. Para remediar tal situación se implementó un conjunto de políticas orientadas a la apertura comercial, la liberalización de los mercados, la desregulación financiera, la privatización de las empresas públicas y la reducción del gasto público. En suma, se propuso y obtuvo un radical redimensionamiento hacia la baja de los estados y un simultáneo fortalecimiento del peso de los sectores privados, fuertemente monopolizados, en las economías de la región. Las políticas ejecutadas impactaron profundamente sobre las estructuras económicas y sociales de nuestros países y redefinieron los límites entre lo público y lo privado en desmedro del primero. Sin embargo, los resultados no fueron los anunciados por el enfoque neoliberal y, aún en los casos en que estas políticas condujeron al crecimiento económico –como en ciertos momentos de la historia reciente de Argentina, Chile o México, para citar los casos favoritos del Fondo Monetario Internacional (FMI)– los efectos sociales fueron muy regresivos. Entre ellos se destacan el aumento de la desigualdad social, la desarticulación de los colectivos organizados como el movimiento obrero y los grupos sociales subalternos y el incremento de la vulnerabilidad del estado frente a los grandes grupos de poder económico nacionales e internacionales. En este contexto, el discurso hegemónico propuso el diseño de políticas sociales focalizadas y descentralizadas dirigidas a “combatir” la pobreza y el desempleo –que, a la luz de la experiencia, resultaron inefectivas– y la promoción de una imagen de austeridad sostenida en la reducción del aparato estatal, en circunstancias en que el gasto público no cesaba de crecer en los países desarrollados. La evidente incapacidad de los gobiernos para resolver la cuestión social –es decir, consolidar un modelo de crecimiento capaz de reducir la inequidad y rescatar a grandes contingentes sociales que viven por debajo de la línea de la pobreza– así como también para desarticular los mecanismos estructurales de la corrupción estatal, demostró los límites de un modelo de sociedad sostenido

sobre la base de la concentración de la riqueza y la exclusión económica y social de vastos sectores de la población, la mercantilización de los espacios públicos y el saqueo del estado emprendido desde sus propias estructuras e instituciones. También puso en evidencia que la imposición y sostenimiento del neoliberalismo iban inexorablemente unidos a fuertes dosis de corrupción, que involucraban no sólo a un estado corrupto sino también a los grupos privilegiados de la sociedad civil. La persistente defensa de este modelo puso así de manifiesto los límites del pensamiento único.

En sintonía con lo anterior, Federico Lorenc Valcarce, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales Gino Germani (IIGG/FCS/UBA, Argentina), aborda el estudio de la producción del discurso político tal como éste se presenta organizado bajo la forma de una agenda. Esta expresaría las relaciones entre los actores políticos, los medios de comunicación y la sociedad, y las disputas políticas que ellos entablan por la producción de sentido. Lorenc Valcarce analiza pormenorizadamente la configuración de la agenda política en la Argentina durante la campaña electoral de 1999, examinando las controversias discursivas entre los principales actores políticos y sociales de aquella coyuntura y los marcos institucionales que estructuraron los recursos simbólicos disponibles. De este modo, analiza los procesos de tematización de los asuntos públicos en torno a un conjunto de cuestiones sociales definidas como relevantes y pese a lo cual no se encontraban adecuadamente atendidas: la crisis económica, la nueva cuestión social, la corrupción política, la inseguridad y el funcionamiento de la justicia. Según el autor, esta configuración de problemas y respuestas expresó en el plano de las ideas los límites de la discusión pública y la acción estatal. En este sentido, el pasaje de la discusión pública a la esfera de la acción estatal constituye un punto crítico en la producción de una política democrática dado que “aquellas cuestiones que van quedando fuera del alcance efectivo de la acción estatal resultan marginadas y luego eliminadas de la agenda política” (Lorenc Valcarce, pág. 50 en este mismo libro).

El artículo de Mariana Heredia, investigadora del Centro de Estudios de Población (CENEP, Argentina), realiza un minucioso análisis del liberalismo conservador argentino y su transformación de marginal en hegemónico en un ciclo histórico que se inicia en los años setenta y termina en los noventa del siglo pasado, con la rearticulación de la derecha y la restitución del orden económico liberal. Heredia señala que el liberalismo se construyó sobre la base de la defensa de la libertad individual, su articulación en el plano económico con el progreso social y la propiedad privada y la planificación de un orden administrativo eficiente destinado a regular las relaciones entre los ciudadanos. En cuanto al conservadurismo, destaca su énfasis en la experiencia y la pericia de las élites, el respeto al pasado y la reivindicación del pragmatismo y la moderación. Finalmente, la convergencia de ambas tradiciones en la actualidad se expresa según la autora en el reconocimiento de las ventajas de la economía de libre mercado y la recurrencia a un entramado institucional para sostenerla. De este modo, confluyen la defensa del orden establecido y la representación de los sectores privilegiados de la sociedad, la prioridad de la libertad sobre la igualdad y la expresión de estos elementos en un sistema ideo-

lógico coherente, esto es, el liberalismo conservador. En el capítulo que incluimos en este libro, Heredia reconstruye y compara los pronunciamientos frente a los principales conflictos sociales y políticos ocurridos en los períodos mencionados, así como también revisa las caracterizaciones que se hicieron de los protagonistas y contenidos de las protestas. Al respecto, concluye que el liberalismo tematizó la cuestión social en clave filantrópica y jurídicista consolidando un discurso aparentemente apolítico y desideologizado. Dicho discurso encontró el fundamento de las protestas en la falta de idoneidad de los políticos o bien en el carácter incompleto de las transformaciones económicas y administrativas y demostró, como resultado de ello, la más absoluta ceguera para atender al vínculo entre violencia política y subordinación de las decisiones a imperativos económicos.

La fuga de lo social y la escalada de los conflictos

Si lo político tiene la función de regular el conflicto social, lo social ha demostrado reiteradamente ser capaz de eludir la labor apaciguadora de lo político. “Cuando lo político se debilita, cuando el partido de los ricos y el de los pobres dicen aparentemente lo mismo [...] cuando se dice que no queda más que escoger la imagen publicitaria mejor diseñada en relación a una empresa que es casi la misma, lo que se manifiesta patentemente no es el consenso, sino la exclusión” (Rancière, 1994: 33). Efectivamente, investigaciones recientes dan cuenta de un acentuado incremento, profundización y radicalización de los conflictos sociales en la región¹. Durante mucho tiempo los ideólogos y los gobernantes de inspiración neoliberal prometieron que las medidas e inequidades propias de la primera etapa de la reestructuración económica y social producirían algunos frutos amargos, pero que a poco andar el virtuoso “efecto derrame” compensaría largamente tales sinsabores. Lamentablemente no ocurrió así, y es por eso que, si los años noventa se iniciaron bajo un contexto de resignación, descomposición social y adormecimiento de los proyectos colectivos, el final de esa misma década estuvo signado por el vigoroso resurgimiento y la constitución de nuevas formas de protesta y organización social protagonizadas, en muchos casos, por actores y movimientos sociales constituidos poco tiempo antes. Estas voces confrontaron explícitamente el discurso que declamaba la inexistencia de alternativas al neoliberalismo y se opusieron, con creciente tenacidad, a las políticas inspiradas en el Consenso de Washington. Efectivamente, los reclamos de estos actores y movimientos consistieron principalmente en reivindicaciones socioeconómicas que cuestionaban los efectos devastadores de las políticas neoliberales. En muchos casos, las mismas trascendieron al ámbito político institucional y en algunos países también dieron cuenta de las limitaciones de los estados nacionales para integrar adecuadamente a los diversos colectivos –como los campesinos o indígenas– comprendidos al interior de sus fronteras territoriales.

Según los análisis realizados por el Observatorio Social de América Latina de CLACSO, los asalariados del sector público, y en menor medida privado, los movimientos campesino-indígenas y urbanos, los pequeños productores y los

estudiantes constituyeron los principales sujetos de las protestas registradas entre mayo de 2000 y abril de 2002. El último período registrado –es decir, aquel comprendido entre enero y abril de 2002– evidencia también un incremento significativo de los conflictos protagonizados por los sectores desocupados (Revistas del Observatorio Social de América Latina-OSAL, 2000/2002)².

Con relación al alcance del ciclo de protestas, es importante señalar que algunas de ellas conjugaron la participación de diversos sectores sociales. Asimismo, el desarrollo de estos colectivos muchas veces excedió el ámbito local, sea éste rural o urbano, y adquirió significación nacional y hasta regional. Al respecto, la inscripción de las luchas en el marco de los procesos de integración regional basados en las propuestas de intervención estratégica y desregulación comercial sostenidas por el gobierno norteamericano abre un campo de oportunidades y temas favorables para la profundización de la convergencia regional y mundial de las protestas.

Las modalidades que asumieron muchos de estos movimientos de resistencia manifestaron también la crisis de las formas tradicionales de la representación y el surgimiento de nuevas formas de organización colectiva. Muchas de estas experiencias eludieron las formas legales y los canales institucionales de la mediación social y política, gestando nuevas estructuras de participación y decisión de tipo asamblearia. Ciertamente es también que muchos de estos conflictos hicieron su aparición en el marco de crisis locales desatadas por el enfrentamiento entre distintas facciones de la coalición o partido de gobierno. No obstante ello, y aún en aquellos casos en que la resolución de los conflictos desembocó en un nuevo pacto de gobernabilidad local, la experiencia acumulada en materia de movilización constituye un importante antecedente de la protesta social en la región que fue adquiriendo, con el tiempo, formas más organizadas y sostenidas. Así, a los paros cívicos y las tradicionales huelgas laborales y de hambre, las protestas sociales incorporaron otras modalidades como las marchas y manifestaciones prolongadas, los paros extendidos y los bloqueos de carreteras.

Interesado por el análisis de las nuevas formas de la política y la protesta social en México, Morgan Quero, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (CRIM, UNAM), estudia el conflicto social desatado en el municipio de Tepoztlán, al norte del estado de Morelos, a raíz del conocimiento público de un proyecto de construcción de un club de golf en tierras comunales. De este modo, rastrea las modalidades de la resistencia popular entre 1995 y 1998 y particularmente destaca la incorporación de principios organizativos de tipo asambleario heredados de la tradición comunera campesina pero dirigidos al logro de objetivos ciudadanos. El proceso de lucha y participación popular puso de manifiesto tanto una crisis de gobernabilidad nacional y local como el enfrentamiento entre las élites locales y las regionales. Por un lado, la sociedad civil rechazó las formas existentes de la representación y mediación política y se recompuso desde la categoría de pueblo. Por el otro, las élites locales se impusieron como portavoces del pueblo organizado y así investidas se enfrentaron a los centros de la política nacional. La resolución del conflicto desembocó en

un nuevo pacto de gobernabilidad local que implicó tanto la eliminación del proyecto que desencadenó la protesta como así también el fortalecimiento y legitimación de un nuevo grupo de poder local que procedió a invisibilizar a la sociedad civil a través de su reducción a la institucionalidad.

Miguel Villarroel Nikitenko, investigador del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES, Bolivia), estudia las acciones sociales conflictivas en Bolivia entre 1970 y 1998 desde el punto de vista de su inscripción en un determinado tipo de estado y analiza el contenido y el nivel de la conflictividad en Bolivia en función de su relación con el tipo de régimen político y la situación económica de cada período. Entendiendo al conflicto como un conjunto de hechos que presentan una movilización de los actores sociales con la finalidad de lograr que se les atiendan sus demandas o reclamos, el autor enfatiza que en todos los casos el estado constituyó el destinatario o interlocutor privilegiado de las acciones conflictivas. Entre 1970 y 1982, y especialmente durante los períodos dictatoriales más duros, la cantidad e intensidad de las acciones conflictivas fue relativamente baja, lo cual, en el contexto de una crisis económica que puso al país al borde del colapso a mediados de los ochenta, sólo puede explicarse en función de la supresión de los derechos civiles y la represión encarada por el estado³. Durante esta época, los conflictos más frecuentes fueron de tipo económico y en menor medida de carácter político-institucional; estuvieron viabilizados por maestros urbanos y estudiantes, obreros fabriles y campesinos, y tuvieron la forma de huelgas laborales y de hambre, paros cívicos y estados de emergencia. El regreso a la democracia, en un contexto económico crítico y políticamente atravesado por la pugna al interior de la coalición gobernante, marcó un proceso signado por un aumento de la conflictividad, el surgimiento de nuevos actores y la revitalización de otros. Estos sectores, como los desocupados, los rentistas, los jubilados, las agrupaciones vecinales o ciudadanas, se agregaron a los empleados públicos y los campesinos. Expresaron reclamos principalmente ligados a cuestiones de política coyuntural o institucional, y a las tradicionales modalidades de protesta sumaron las marchas y manifestaciones, las tomas e intervenciones y los bloqueos de vías en zonas urbanas y rurales.

El trabajo de Paula Klachko, investigadora del Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina (PIMSA, Argentina), centra su atención en el estudio de la conflictividad social en la Argentina de los noventa y en particular analiza las modalidades y sujetos de la protesta social en ocasión de las luchas callejeras en Cutral Có y Plaza Huincul, en la provincia de Neuquén, entre 1996 y 1997, a raíz de la grave situación de pauperización y descomposición social producida tras la privatización y reorganización de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales, misma que había sido un factor fundamental del desarrollo económico y social de las localidades mencionadas⁴. Este estudio brinda interesantes elementos para analizar la innovación que significó una nueva metodología de protesta que luego habría de generalizarse, y que recurrió principalmente a los cortes de ruta pero también a las huelgas y luchas callejeras. Y también da cuenta de la génesis y el desarrollo de una fuerza social y política en la que confluyeron trabajadores ocupa-

dos y desocupados y otras fracciones sociales, y que inscribió su lucha en el marco de la ofensiva del capital financiero sobre el industrial y el enfrentamiento (interburgués) entre las facciones del partido en el gobierno, tanto en el nivel local como en el provincial. Es así que este proceso conflictivo se caracterizó por un alto grado de desinstitucionalización y evidenció nuevas experiencias de organización y participación como la asamblea y nuevas personificaciones sociales como los fogoneros y los piqueteros⁵.

Las limitaciones del marco institucional y de la democracia electoral

Estas nuevas dimensiones del conflicto social y del comportamiento colectivo señalan las debilidades y los límites de los procesos de democratización en la región. Fundamentalmente expresan el impacto corrosivo de las reformas económicas sobre la profundidad y calidad de la vida democrática en nuestros países. El crecimiento de los niveles de desigualdad y polarización social, la intensificación de la protesta social y su criminalización y represión por parte de los estados democráticos, son todos elementos que dan cuenta de un campo de preocupaciones que cuestionan las capacidades de estos regímenes para incorporar eficazmente el principio de igualdad en el marco de modelos democráticos que se definen a partir de la posibilidad de articulación de dos principios, a saber: libertad e igualdad.

El tratamiento de la cuestión política requiere pues, ante todo, una profunda reflexión sobre los evidentes retrocesos que están experimentando nuestras sociedades en materia del efectivo cumplimiento de los derechos civiles y sociales supuestamente consustanciales al capitalismo democrático. La frustración de las expectativas y la retracción de la participación cívica son el resultado de la confrontación con este panorama (Boron, 2000). En esta línea de preocupaciones relativas a la calidad de las democracias, Gabriel Vitullo, investigador del Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas (IFCH/UFRGS, Brasil), estudia los casos de Argentina y Brasil y explora las características de los sistemas políticos y específicamente de la dinámica electoral en los mencionados países. La fragmentación y atomización de las oferta partidaria, la caída de los niveles de presentismo electoral, la personalización de las opciones electorales y la errática mutación de las preferencias de los votantes son elementos que aporta el autor para dar cuenta de la apatía y el desinterés, la desconfianza y hasta el rechazo ciudadano por la política. Sin embargo, y contrariando los enfoques exclusivamente institucionalistas y procedimentales de la democracias, propone que estos fenómenos encuentran sus raíces en la desagregación social que resulta de los procesos de ajuste neoliberal en los países estudiados.

Sin embargo, al tiempo que algunos analistas constatan el creciente empobrecimiento de la vida cívica y los impedimentos estructurales de los gobiernos democráticos para resolver las demandas de la ciudadanía, otros confían en la posibilidad de profundizar los diseños institucionales existentes y promover nuevas y mejores formas de participación y representación política. Existe hoy

una variedad importante de estudios que atienden a los beneficios que podrían derivarse de una racionalización de la ingeniería institucional de las democracias latinoamericanas. Una de las vertientes de este pensamiento plantea la cuestión de la gobernabilidad en el espacio local, misma que define como una instancia de articulación entre las demandas ciudadanas y las organizaciones comunitarias. Aún cuando no deja de registrar importantes deficiencias en esta materia, presenta al nivel municipal como el ámbito privilegiado para la revitalización de la política democrática. En este sentido, Fernando Mack Echeverría, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-México), estudia los retos políticos que enfrentan los municipios en Guatemala tras la apertura democrática con particular énfasis en las limitaciones que encuentran para gestionar los conflictos locales. Según nuestro autor éstos se despliegan en un contexto caracterizado por la aplicación de políticas de descentralización con el objeto de promover la participación y desactivar la guerrilla; también por las dificultades para la integración nacional de los diversos grupos étnicos y la consolidación de la intervención militar frente a la debilidad de los tribunales y la policía nacional civil, lo que explica por ejemplo la importante gravitación de los linchamientos en Guatemala aún cuando también inciden otros factores, como la crisis de los mecanismos de delegación y la herencia autoritaria de la sociedad guatemalteca. Desde un enfoque si no optimista al menos esperanzado, propone que entre los espacios cedidos desde arriba para controlar el surgimiento y la consolidación de las movilizaciones sociales y los espacios ganados desde abajo y por los que transita la acción colectiva, es posible vislumbrar un intersticio para la construcción de una política más democrática, sostenida sobre la base de la participación de las personas en los asuntos comunitarios, la igualdad de oportunidades y la resolución de las diferencias a través de mecanismos procedimentales.

Esta línea de investigación reivindica el potencial de los municipios como foros para integrar comunitariamente los intereses y necesidades de los ciudadanos y, en su apogeo, para promover la participación democrática de la sociedad civil. Desde una lectura crítica, como la que propone Sheldon Wolin en su libro *Política y Perspectiva*, este proceso puede ser leído como una de las formas en que lo político se relocalizaría en el interior de los regímenes democráticos. De este modo, la actividad política resulta fragmentada y sublimada en el ámbito local y la ciudadanía política se desplaza hacia otras formas de pertenencia y participación, hacia niveles de agregación subnacionales o locales que en otras épocas fueron considerados como apolíticos (Wolin, 1993).

Willibald Sonnleitner Gutiérrez, investigador del Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano (CEDDU, Colegio de México), analiza el juego político-electoral entre los mayas de Los Altos de Chiapas, en México, y saluda con evidente optimismo el pasaje de un sistema monopartidista a otro que describe como más abierto y plural. Su mirada sobre la vida política local se circunscribe al análisis de las instituciones, y más específicamente, al funcionamiento del sistema de partidos y la dinámica electoral. Frente a las explicaciones "culturalistas" que según nuestro autor identifican contradicciones irresolubles entre las formas de organización comunitaria de los pueblos

indígenas y los principios occidentales del pluralismo democrático contemporáneo, argumenta que el reciente proceso de democratización electoral ha sido un factor emancipador en la medida que prometía integrar políticamente a amplios sectores de la población chiapaneca excluidos de los espacios de participación y representación política en el estado nacional mexicano. Desde esta perspectiva, la centralidad de la competencia electoral radica en las posibilidades que la efectiva canalización de las demandas ciudadanas y la ampliación progresiva de las libertades políticas abrirían para la expresión pacífica de la “voluntad popular”. De este modo, el juego electoral multipartidista⁶ y la alternancia en el poder municipal cifran positivamente las expectativas de estabilización social y ordenamiento político en el marco del conflicto armado que encabeza la insurgencia zapatista, y que encuentra sus raíces en la experiencia histórica de la exclusión económica y el personalismo y el corporativismo característicos de la política mexicana. Al respecto, el autor señala que la democratización electoral es un proceso incipiente, heterogéneo e inacabado cuyos límites se expresan en el altísimo grado de abstencionismo electoral⁷, la proliferación de consejos municipales nombrados por la cámara legislativa estatal toda vez que surgen conflictos y desórdenes severos, la conformación de espacios autónomos rebeldes en manos de los zapatistas que desconocen las decisiones de las instituciones estatales y que en algunos casos conducen al establecimiento de un espacio de coexistencia pacífica y en otros resultan en el desencadenamiento de enfrentamientos armados.

Frente a las lecturas que enfatizan la dimensión étnica del levantamiento zapatista, Sonnleitner sostiene que sus orígenes y dinámicas deberían ser leídos en clave sociopolítica⁸. En este sentido, el autor considera que la dicotomía teórica que se postula entre el multipartidismo occidental y las auténticas costumbres autóctonas resulta artificial y cierra la posibilidad de imaginar y promover formas más democráticas de articulación entre las comunidades indígenas y el estado nacional. Ciertamente, las modalidades de acción y legitimación del zapatismo rebasan cualquier retórica fundada exclusivamente en la unidad comunitaria del pueblo indígena. Sin embargo, es indudable que las repercusiones del levantamiento zapatista de 1994 sobre la vida social y política mexicana exceden ampliamente el análisis del juego partidario y electoral y han repercutido no sólo sobre la política chiapaneca sino también sobre distintos niveles y dimensiones de la vida nacional mexicana. Efectivamente, la insurgencia zapatista constituye una experiencia política extremadamente rica que expresa la marginación y la exclusión de los campesinos y los indígenas de Chiapas, pero es también una crítica radical al funcionamiento del sistema político mexicano. Las implicancias prácticas de esta crítica son materia de investigaciones y de profundos debates teóricos y filosóficos –en algunos casos guiados por el interés de fundar sobre nuevas bases un proyecto emancipatorio. Por otro lado, existe una línea de estudios que interpreta a la experiencia zapatista en términos de una visión no estatalista⁹. Desde esta perspectiva, el zapatismo apuntaría directamente al corazón de la concepción estado-céntrica que caracteriza a las corrientes teóricas modernas y reinventa la política como una ética alternativa al capitalismo. Asimismo, la movilización y la lucha son pensadas como prácticas de contrapoder, o bien resistencias al

biopoder¹⁰. Otros autores señalan que el estado todavía conserva centralidad o vigencia como categoría explicativa del rumbo que siguen las sociedades capitalistas en la medida que se supone que los proyectos políticos encuentran en dicho ámbito el espacio adecuado para su expresión e instrumentación a través de un conjunto de intervenciones públicas actuales¹¹. Sin embargo, observan que la práctica y el discurso zapatista no suponen una movilización centralmente orientada a la destrucción de la figura estatal y alertan sobre los peligros de la dilución del conflicto de clase toda vez que la lucha de los campesinos indígenas zapatistas es referida a su pertenencia nacional y a su dignidad humana (Boron, 2001). Finalmente, y tomando distancia de los enfoques reformistas o revolucionarios inscriptos en la tradición marxista occidental, Walter Mignolo da cuenta del zapatismo como una revolución teórica capaz de llevar la fragmentación a proyecto universal (Mignolo, 1997)¹².

Lo estatal, lo público y lo privado

Las discusiones precedentes se vinculan con un conjunto de problemas relativos a los alcances de la acción estatal, las formas de articulación entre lo público y lo privado y la potencialidad transformadora de las fuerzas sociales en América Latina. Una de estas problemáticas consiste en el análisis de los límites y posibilidades de la acción estatal para privilegiar los bienes comunitarios y los fines sociales por sobre las estrategias y los intereses económicos de las empresas y grupos privados. Las dificultades para promover una concepción del bien común se expresan, en muchos casos, en la desigual distribución y uso de las tierras y los recursos naturales sobre los que se asientan las poblaciones así como también en el diferencial acceso a los medios de comunicación y de expresión política (de la Cuadra, 2001). Otro aspecto a considerar es aquel que atiende a las capacidades del estado para integrar a los colectivos sociales incluidos en su territorio. En este sentido, los conflictos protagonizados por minorías étnicas o culturales implican cosmogonías y formas de vida inscriptas en un territorio que requieren el tratamiento de dimensiones tales como “la autonomía, la autodeterminación y el respeto a la dignidad e identidad de un pueblo” (de la Cuadra, 2001: 58).

En relación con estas cuestiones, Rodrigo Van Bebber, investigador del Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación (PIIE, Chile), revisa los históricos reclamos económicos así como las nuevas reivindicaciones políticas y culturales del pueblo mapuche, y analiza el discurso de la clase política chilena (en sus vertientes de derecha, centro e izquierda) sobre el papel que le cabe al estado frente al denominado “conflicto mapuche”. El autor sostiene que en la actual coyuntura los reclamos indígenas por la recuperación de sus tierras constituyen un claro desafío para el sistema político chileno y en especial para los partidos, en la medida que ponen en cuestión el principio de la propiedad privada. Efectivamente, la clase política chilena considera sus reivindicaciones como un tema de política agraria y en tal sentido se dirige a los mapuches no como una minoría étnica sino como campesinos, explotados o marginados. Al mismo tiempo, las nuevas fundamentaciones centradas en el

reconocimiento y el respeto de la identidad indígena podrían ser consideradas como un cuestionamiento profundo del modelo de estado chileno concebido como la expresión política de la unidad nacional. No obstante ello, el autor comprueba que el conflicto mapuche es reconocido por ambas partes como un problema de representación política. Por un lado, el estado continúa siendo el actor político principal y el único interlocutor válido que reconocen las organizaciones mapuches para canalizar sus demandas, aún cuando las mismas son argumentadas desde una posición de otredad reprimida y marginada. La formación de una élite intelectual mapuche capaz de utilizar el saber occidental para reelaborar el tradicional discurso de los pueblos originarios constituye una estrategia novedosa a la hora de canalizar acciones y reclamos. Por otro lado, los principales partidos políticos comparten una concepción comunitaria de la organización social, misma que les permite sostener la inclusión efectiva o posible de los indígenas en la nación chilena.

Los problemas planteados en este apartado guardan estrecha relación con las formas y contenidos de la vida democrática de nuestras sociedades. Por un lado, las reivindicaciones de las minorías étnicas –como los reclamos mapuches dirigidos a las empresas privadas y las autoridades gubernamentales– se expresan en contra de los despojos territoriales así como también de las inequidades y los efectos desestabilizadores del equilibrio ambiental que resultan de la aplicación de medidas neoliberales orientadas a la liberalización de los mercados. Por otro lado, el respeto de sus derechos particulares que estas minorías étnicas reclaman cuestiona profundamente la tradicional concepción de la democracia en el capitalismo, organizada en torno a la figura de la ciudadanía homogénea.

Esta última consideración remite directamente a los debates actuales sobre el pluralismo. Así, mientras algunas posturas alegan la necesidad de construir una política basada en la multiplicidad de las identidades personales y la diversificación de las experiencias de lucha y resistencia, otros autores señalan las limitaciones y peligros que encierra la celebración de la diferencia y la diversidad y la aplicación de estas nociones al análisis de relaciones sociales que son, ante todo, relaciones de clase. En este sentido, Ellen Meiksins Wood apunta que la diferencia que constituye la clase como una identidad es, por definición, una relación de desigualdad y poder, una diferencia que no puede ser reducida a simple pluralidad, y concluye que las perspectivas pluralistas dan cuenta de la fragmentación creciente de la sociedad contemporánea y la disolución de las antiguas certidumbres y universalidades pero fracasan a la hora de articular un proyecto de organización humana verdaderamente alternativo al capitalismo (Meiksins Wood, 2000[a]). En este sentido, ambas perspectivas reseñadas difieren profundamente en el análisis y balance de las experiencias de articulación a escala regional y mundial de los procesos locales de lucha y resistencia. Asimismo, expresan, entre otras, posiciones encontradas, y en ocasiones irreductibles, sobre las relaciones entre estado, nación y democracia y sobre las limitaciones que esta última encuentra en el seno del capitalismo. No obstante ello, unas y otras corrientes convergen en su reivindicación del potencial emancipatorio de la actividad política. Se trata entonces

ces de recoger el desafío que consiste en imaginar y construir sociedades más justas e igualitarias fundadas en la más auténtica participación colectiva en los asuntos de la vida pública.

Los comentarios vertidos en esta presentación no pretenden abarcar la amplia variedad de enfoques y casos de estudio implicados en las investigaciones conducidas por los becarios del Programa en torno a las formas de la política y el conflicto social en la región. Discusiones más que interesantes se han desarrollado en el marco de un Seminario organizado sobre la plataforma del Campus Virtual de CLACSO y realizado entre el 21 de agosto de 2000 y el 15 de octubre del mismo año. Estos resultados también fueron presentados en el panel “Estado, ciudadanía y conflictos sociales”, que se reunió en ocasión de la XX Asamblea de CLACSO y la II Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, el día 21 de noviembre de 2001, en Guadalajara, México.

Esta introducción a los textos seleccionados de ninguna manera reemplaza la riqueza y profundidad contenida en cada uno de ellos, y constituye una invitación a compartir las experiencias de investigación y los debates que ellas suscitaron entre los investigadores jóvenes ganadores de las becas otorgadas en 1999 por el Programa de Becas CLACSO/Asdi.

Bibliografía

- Agamben, Giorgio 1998 (1995) *Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida* (Valencia: Pre-Textos).
- Antxustegi Igartúa, Esteban 2000 "La lealtad política", en *Revista Leviatán* (Madrid) N° 81, Otoño, II Época.
- Benasayag, Miguel y Diego Sztulwark 2000 *Política y situación. De la potencia al contrapoder* (Buenos Aires: Ediciones de Mano en Mano).
- Boron, Atilio A. 2002[a] *Imperio & Imperialismo* (Buenos Aires: CLACSO).
- Boron, Atilio 2002[b] "Imperio: dos tesis equivocadas", en *Revista del Observatorio Social de América Latina-OSAL* (Buenos Aires) año III, N° 7, junio.
- Boron, Atilio A. y Julio Gambina 2002 "Introducción", en Gambina, Julio (compilador) *La globalización económico-financiera. Su impacto en América Latina* (Buenos Aires: CLACSO).
- Boron, Atilio A. 2001 "La selva y la polis. Reflexiones en torno a la teoría política del zapatismo", en *Revista del Observatorio Social de América Latina-OSAL* (Buenos Aires) año II, N° 4, junio.
- Boron, Atilio A. 2000 *Tras el búho de minerva. Mercado contra democracia en el capitalismo de fin de siglo* (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica).
- Colectivo Situaciones 2002 *Apuntes para el nuevo protagonismo social* (Buenos Aires: Ediciones de Mano en Mano).
- Colectivo Situaciones 2001 *Contrapoder. Una introducción* (Buenos Aires: Ediciones de Mano en Mano).
- Cheresky, Isidoro e Inés Pousadela 2001 *Política e instituciones en las nuevas democracias latinoamericanas* (Buenos Aires: Paidós).
- de la Cuadra, Fernando Marcelo 2001 "Conflicto mapuche: génesis, actores y perspectivas", en *Revista del Observatorio Social de América Latina-OSAL* (Buenos Aires) año II, N° 5, septiembre.
- Hardt Michael y Antonio Negri 2002[a] "La multitud contra el Imperio", en *Revista del Observatorio Social de América Latina-OSAL* (Buenos Aires) año III, N° 7, junio.
- Hardt Michael y Antonio Negri 2002[b] (2000) *Imperio* (Buenos Aires: Paidós).
- Holloway, John 200[a] "El zapatismo y las ciencias sociales en América Latina", en *Revista del Observatorio Social de América Latina-OSAL* (Buenos Aires) año II, Nro. 4, junio.
- Holloway, John 2001[b] "La asimetría de la lucha de clases. Una respuesta a Atilio Boron", en *Revista del Observatorio Social de América Latina-OSAL* (Buenos Aires) año II, N° 4, junio.
- Lozano, Claudio 2000 *Democracia, estado y desigualdad* (Buenos Aires: EUDEBA).

Meiksins Wood, Ellen 2000[a]: “Trabajo, clase y estado en el capitalismo global”, en *Revista del Observatorio Social de América Latina-OSAL* (Buenos Aires) año I, N° 1, junio.

Meiksins Wood, Ellen 2000 (1995)[b] *Democracia contra capitalismo* (México D.F.: Siglo XXI).

Mignolo, Walter 1997 “La Revolución teórica del zapatismo: sus consecuencias históricas, éticas y políticas”, *Revista de teoría y crítica literaria Orbis Tertius* (Buenos Aires) año II, N° 5.

Rancière, Jacques 1994 (1990) *En los bordes de lo político* (Santiago de Chile: Editorial Universitaria).

Revista del Observatorio Social de América Latina (OSAL) 2000/2002, N° 1 al 7 inclusive (Buenos Aires: CLACSO).

Sztulwark, Diego 2001 “El zapatismo y la bioresistencia” en *Revista de Política La escena contemporánea* (Buenos Aires) junio, N° 6.

Vilas, Carlos 2001 “El síndrome de Pantaleón. Política y administración en la reforma del estado y la gestión de gobierno”, en *Revista de Ciencias Sociales* FACES-LUZ (Caracas) Vol. VII, N° 2, mayo-agosto.

Wolin, Sheldon 1993 (1960) *Política y perspectiva. Continuidad y cambio en el pensamiento político occidental* (Buenos Aires: Amorrortu).

Notas

1 Según datos producidos por el OSAL, entre mayo de 2000 y abril de 2002, la cantidad de conflictos registrados en 18 países latinoamericanos y caribeños aumentó significativamente. La cuantificación de las acciones de protesta arrojó los siguientes resultados agregados a nivel regional: mayo-agosto de 2000, 709 casos; septiembre-diciembre de 2000, 1.286; enero-abril de 2001, 1.221; septiembre-diciembre de 2001, 1.870; enero-abril de 2002, 2.425. En relación a la cobertura de los mismos, es importante señalar que las fuentes consultadas por el OSAL fueron, primordialmente, periodísticas. A éstas se agregó –para el período relevado– la información suministrada por los siguientes centros de investigación: el Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina (PIMSA, Argentina), el Laboratorio de Políticas Públicas (LPP-UERJ, Brasil), el Programa de Estudios sobre América Latina y el Caribe (PROEALC-UERJ, Brasil). También se recibió la colaboración de investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE-UNAM, México) y del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES-UCV, Venezuela). Informe interno de actividades del Observatorio Social de América Latina (OSAL), mayo de 2002.

2 Para un análisis detallado de la evolución de la conflictividad social entre mayo de 2000 y abril de 2002 y un relevamiento de las experiencias más significativas de cada período, pueden consultarse las revistas del Observatorio Social de América Latina (OSAL) 2000/2001/2002.

3 El autor alerta sobre los riesgos metodológicos de la subrepresentación de los conflictos toda vez que esta investigación construyó las bases de datos en base al seguimiento de los registros de acciones conflictivas aparecidos en los principales medios de comunicación. Otro dato interesante: para todo el período estudiado, las negociaciones finales y las resoluciones de los conflictos registrados en sus inicios no fueron relevadas o priorizadas por los medios masivos de comunicación.

4 La autora señala que el sistema político provincial estaba articulado en base a un fuerte entramado clientelista desarrollado con los recursos del capitalismo de estado y las regalías petroleras e hidrocarburíferas giradas por el estado nacional, y que permitía sostener mediante la distribución de ingresos una base de consenso necesaria para el mantenimiento del Movimiento Popular Neuquino (MPN) en el gobierno provincial y local. La privatización de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), realizada en 1991, implicó la pérdida de la principal fuente de ingresos por parte del estado provincial y dio comienzo a un proceso de desestructuración de las fracciones sociales dominantes. Fue también el inicio de la desarticulación del “capitalismo de estado en enclave” y el comienzo de un proceso de resistencia social por parte de los habitantes.

5 Las figuras del fogonero y del piquetero encarnaron la representación política del pueblo al tiempo que adquirieron legitimidad para influir en la toma de decisiones en asamblea de manera determinante.

6 El autor argumenta que el multipartidismo no es un fenómeno externo a las comunidades indígenas y que en la actualidad el poder municipal en los Altos de Chiapas es el objeto de una lucha constante entre múltiples facciones de poder por el control de los recursos materiales y simbólicos. En este sentido señala que los pactos o acuerdos entre facciones municipales, las alianzas estratégicas con los principales grupos de poder local, la selección de candidatos en consultas y asambleas generales, la integración de las facciones opositoras dentro de los ayuntamientos en transición hacia el multipartidismo y la conversión de católicos al protestantismo con el objeto de acceder a recursos materiales y organizativos necesarios para la actividad política, dan cuenta de algunas modalidades particulares bajo las cuales el multipartidismo ha sido integrado a los usos y costumbres que rigen la vida política de los indígenas alteños en la actualidad.

7 A partir de 1995 la insurgencia zapatista rechazó los comicios oficiales, lo cual resultó en la abstención electoral de vastos sectores de la población indígena.

8 Sonnleitner identifica la reciente consolidación de un nuevo paradigma que presenta a los movimientos indígenas como la punta de lanza de los movimientos sociales en América Latina. A esta corriente de pensamiento reconoce el autor el mérito de haber contribuido a revalorizar las reivindicaciones de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de las llamadas minorías étnicas. Sin embargo, señala que ciertas vertientes radicales del indianismo empezaron a promover nuevas formas de exclusión instrumentalizando políticamente el discurso étnico.

9 Una lectura sobre esta corriente puede ser consultada en Sztulwark (2001: 18 a 26). En este artículo el autor revisa las principales ideas de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, a los que denomina "invencionistas", y de Alain Badiou y Toni Negri, a los que califica como "ontólogos". Según Sztulwark, estos últimos adjuntan a su visión no estatista de la política una idea no consensualista ni contractualista de la democracia. Para ampliar esta perspectiva sugerimos consultar los siguientes trabajos: Michael Hardt y Antonio Negri (2002[a] y 2002[b]); John Holloway (2001[a] y 2001[b]); Miguel Benasayag y Diego Sztulwark (2000). En la misma línea pueden consultarse los capítulos compilados por el Colectivo Situaciones (2001 y 2002).

10 Michel Foucault designaba de este modo a la capacidad de regular la vida social. Abordajes renovados como el de Giorgio Agamben retoman esta lectura y recuperan la mirada aristotélica para dar cuenta de acciones y movimientos sociales que resisten al poder que reduce a las comunidades y personas a mera existencia biológica (Agamben, 1998).

11 Desde Weber hasta Marx el estado ha sido definido como el objeto de la lucha política y el espacio institucional y operativo al que se dirigen los proyectos políticos. Ellen Meiksins Wood sostiene que aún en el contexto de la globalización el estado continúa siendo de vital importancia en la reproducción efectiva del capital en la economía mundial, así como también

lo es la conquista del estado por parte de las clases populares (Meiksins Wood, 2000[a]). En esta misma línea pueden consultarse los siguientes trabajos: Meiksins Wood (2000[b]) y Boron (2002[a]); Boron (2002[b]).

12 Mignolo considera al zapatismo como una revolución teórica, cuya mejor expresión radica en la capacidad de pensar en los bordes, de constituirse en un lenguaje puente entre la cosmología indígena y el marxismo leninista y crear un nuevo sentido. Por un lado, esta gnoseología de frontera comprende a la experiencia democrática como una instancia de “rearticulación de lo regional con lo nacional y de ambos con los trasnacional” o bien como la “fragmentación llevada a proyecto universal”. Así, Mignolo apunta que los zapatistas defienden el concepto de estado-nación toda vez que piden participar en la construcción de la democracia en México al tiempo que rechazan ese estado-nación que los ha marginado en complicidad con las fuerzas homogeneizadoras de la racionalidad del mercado. Por otro lado, esta perspectiva revolucionaria introduce el reclamo por la dignidad como una cuestión indígena ligada a valores vitales comunitarios y opuestos a los criterios centrados en la acción individual y la racionalidad y la eficiencia aplicadas a la producción económica. En ese sentido, el zapatismo es un macro-relato narrado desde la perspectiva de la colonialidad (Mignolo, 1997).